

III

Colombia a finales del siglo XX

A lo largo de buena parte del siglo que termina, y sobre todo a partir de 1958, Colombia ha mantenido una notable estabilidad económica y política, paradójicamente combinada con altas dosis de agitación social y violencia. Se podría decir, a título de hipótesis, que la inconformidad social y la violencia guardan cierta relación con la estabilidad de las instituciones económicas y de las prácticas políticas, ya que la estrechez del juego político y el marginamiento social de vastos sectores de población, si bien no se puede decir que constituyan la "causa" de la violencia, sí han contribuido a su expansión y persistencia. A su vez, la violencia política ha terminado por favorecer el predominio del sistema político bipartidista, que aparece para muchos como la única alternativa real frente a los violentos, así como la existencia de una vasta economía informal que se ha hecho funcional al mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos.

En tres oportunidades a lo largo de este siglo XX, la violencia ha irrumpido

en la superficie política: en el paso del siglo XIX al XX, en la Guerra de los Mil Días (1899-1902); a fines de los años cuarenta, cuando ésta se agudizó tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y dio paso a la Violencia liberal-conservadora (1948-1958); y, en la época actual, con la intensificación de la lucha guerrillera desde mediados de los años noventa. De las tres explosiones violentas, la última, en la que nos encontramos, es la que parece haber puesto más seriamente en peligro la tradicional estabilidad económica y política de Colombia.

I. UN PASADO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Los grandes indicadores de la economía colombiana han mostrado siempre una estabilidad excepcional en el contexto regional, combinada con tasas de crecimiento moderadas pero constantes. Sin embargo, este crecimiento sostenido ha sido insuficiente para incorporar a la mayor parte de la población colombiana en el sector formal y moderno de la acti-

vidad productiva. Más de la mitad de la producción colombiana se apoya en la economía informal, que ha contribuido de manera notable al equilibrio del sistema.

El modesto producto nacional ha dependido, en buena medida, de los recursos naturales y sus respectivas bonanzas. Durante el siglo XIX, la economía colombiana giró en torno a productos como la minería, la quina, el tabaco, el café. En el siglo XX que concluye y hasta no hace mucho tiempo, la mayor fuente de riqueza seguía siendo el café, complementado, desde mediados de este mismo siglo, por un cierto grado de desarrollo industrial, importante en el contexto regional. Desde los recientes años ochenta el café ha sido desplazado por el petróleo, el carbón y las drogas.

Colombia mantuvo el mayor crecimiento promedio en América Latina, particularmente durante las últimas cuatro décadas. La tasa media de inflación ha sido también una de las más bajas en el periodo 1950-1998. Y, durante las últimas tres décadas, la economía colombiana había sido la única del continente que había escapado a las recesiones abruptas y a las crisis cambiarias y/o fiscales serias. La recesión que avanzaba desde 1996, y que en 1999 se ha convertido en una depresión, interrumpe este prolongado ciclo de crecimiento con estabilidad.

El buen desarrollo de la economía se había debido, fundamentalmente, a dos factores. En primer lugar, a las ya mencionadas bonanzas. Pero también a un manejo macroeconómico sustraído en buena medida a los intereses inmediatos de los políticos. En efecto, los ministros de Hacienda han sido casi siempre economistas de reconocido prestigio. Y, por lo menos hasta la apertura económica iniciada en 1991, el gobierno solía concertar la política económica con los gremios empresariales, al margen del Congreso. La centralización técnica del manejo económico se acentuó a partir de 1968, cuando Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) le quitó al Congreso casi toda injerencia en la elaboración y ma-

nejo del presupuesto, y confió buena parte de la política macroeconómica a la Junta Monetaria de la época. A pesar de sus virtudes, el manejo tecnocrático de la economía ha hecho que la combinación de estabilidad y crecimiento haya sido posible, con frecuencia, a costa de medidas que afectan los ingresos de amplios sectores no pertenecientes a la economía formal.

Colombia exhibe hoy uno de los más altos niveles de desigualdad social en América Latina. Tradicionalmente, la distribución del ingreso ha sido bastante regresiva. La mejoría que había experimentado en los años setenta sufrió un deterioro moderado en las dos décadas siguientes. En los años noventa, en particular, se observa un aumento considerable de la concentración del ingreso, incluso dentro de cada grupo social. Según estadísticas elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación en 1998, el 20% de los colombianos tiene ingresos inferiores a la "línea de indigencia" y el 54% vive en la pobreza. Esta última afecta a un 70% de la población rural. No es de extrañar, pues, que la débil urdimbre social se haya desarticulado aún más en los últimos años.

2. LA ESTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

La vida política institucional colombiana también ha mostrado una estabilidad excepcional, al menos desde el punto de vista formal. La Constitución de 1886 duró más de un siglo, hasta 1991. Desde 1850 hasta hoy, dos partidos, el liberal y el conservador, han gobernado a Colombia. El país sólo ha tenido tres gobiernos *de facto*. El primero de ellos fue resultado del golpe efectuado por el general José María Melo, en 1854. Pero su gobierno fue efímero. Los dos siguientes, ejercidos entre 1953 y 1958, fueron producto, en buena medida, de un arreglo entre las élites civiles y los mandos militares, destinado a poner fin a la violencia interpartidaria que se agudizó luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán (1948). Cuando el general Gustavo Rojas

Pinilla (1953-1958) intentó independizarse de la tutela partidista, fue derrocado y sustituido por una junta militar de corta duración (1958), cuya misión fue la de preparar nuevas elecciones. Así, desde 1958, los dos partidos históricos, unidos en el Frente Nacional, retornaron al poder. Por disposición constitucional, se alternaron en la Presidencia y distribuyeron por mitades el resto de los cargos públicos. Aunque el Frente Nacional concluyó en 1974 y fue definitivamente abolido por la Constitución de 1991, los partidos liberal y conservador, aunque muy fragmentados, siguen dominando la escena política. La apertura política instituida por la nueva Constitución se ha visto en buena medida neutralizada por las tradicionales prácticas políticas del bipartidismo: el recurso a los mecanismos clientelistas o incluso a la violencia local.

No es extraño, pues, que Colombia sea considerada como una de las democracias más estables de América Latina –al menos en la medida en que la democracia se identifique con la existencia de partidos y la elección popular de los gobernantes. Y que, a pesar de ello, conviva con altas dosis de violencia.

3. LA EXPLOSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Como señalamos al comienzo, en el siglo XX Colombia ha visto tres explosiones de violencia, de las cuales la actual amenaza realmente la estabilidad económica, política e institucional del país, por tratarse de una confrontación que enfrenta al orden social establecido.

A fines del siglo XIX, los liberales radicales –defensores del federalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, y los intereses populares– declararon la guerra al gobierno conservador de la Regeneración –centralista y clerical– en una guerra civil de carácter nacional, la Guerra de los Mil Días (1898-1902). A pesar de la intensidad y duración de la confrontación, ésta no constituía una real amenaza al establecimiento, pues se trataba, finalmente, de una guerra controlada por las élites. Concluyó, además, con

un claro triunfo del gobierno. La doble victoria política y militar de los conservadores les permitió ejercer, durante tres décadas, una sólida hegemonía e instaurar un prolongado período de paz.

El ascenso del líder liberal y populista Jorge Eliécer Gaitán, su asesinato en 1948, así como el estallido popular y la ampliación masiva de la violencia que le siguieron, pusieron por primera vez en grave peligro la tradicional estabilidad de las instituciones políticas. De hecho, llevó a la instauración, en 1953, del segundo gobierno *de facto* en la historia de Colombia y, luego, del Frente Nacional bipartidista (1958-1974). La ausencia de una sólida organización popular y de su carismático líder asesinado, así como, por otro lado, la unión de las élites civiles y el respaldo militar que recibieron les permitió a aquéllas volver a conducir al país a una relativa normalidad institucional. Sin embargo, por su carácter excluyente, el arreglo bipartidista se convertiría en una bomba de tiempo para la misma estabilidad que pretendía garantizar. En efecto, desde fines del Frente Nacional, la presión social comenzó a desbordarse. A comienzos de los años setenta, se desarrolló un fuerte movimiento campesino en lucha por la tierra y una continua movilización de pobladores urbanos en demanda de servicios del Estado, que se prolongaría a todo lo largo de los ochenta. Paralelamente, irrumpió una lucha guerrillera que, a diferencia de lo acontecido en otras naciones latinoamericanas, encontraba en Colombia profundas raíces históricas y sociales en la guerrilla liberal de los años cincuenta y en un proceso de colonización agraria no regulado por el Estado. A estas condiciones, favorables al desarrollo de la lucha armada, se sumaron, sin duda, la influencia del triunfo de Mao en China y de Castro en Cuba, la difusión de una ideología que sustentaba la lucha armada y, sobre todo, la decisión de algunos dirigentes que desencadenaron y siguen alimentando ese tipo de confrontación. No de otra manera se podría entender que, en numerosos países que padecen peores desequilibrios sociales y políticos,

no exista ni haya existido nunca la lucha guerrillera.

A comienzos de los años noventa, algunas de aquellas organizaciones, como el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), menos arraigadas en la tradición de lucha social y políticamente derrotadas, dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. Pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una reducida disidencia del EPL y otra menor del M-19, el Jaime Bateman Cayón, continuaron su acción armada. A pesar de su aislamiento político –resultado de los procesos de paz adelantados por Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, de la Asamblea Constituyente de 1990, de los métodos delictivos empleados en su accionar armado, del derrumbe de la Unión Soviética y de la extinción de la lucha guerrillera en la región–, estas organizaciones renacieron con tal fuerza militar, que le plantean al establecimiento y sus instituciones el reto tal vez más azaroso de la historia republicana.

A diferencia de lo acontecido hace un siglo en la Guerra de los Mil Días, no se trata hoy de un enfrentamiento entre las élites que pueda ser resuelto con un pacto de caballeros; a pesar de su escasa representatividad social y legitimidad política, las guerrillas de hoy tienen unos orígenes, una historia y una composición que no facilitan un arreglo de cúpulas. Exigen una redistribución del poder. Y, en contraste con las guerrillas liberales de los años cincuenta, las de hoy cuentan con una sólida organización militar y una larga experiencia de lucha, mientras las élites se hallan profundamente fragmentadas.

Al margen de los movimientos sociales y políticos ya enunciados, desde comienzos de los mismos años setenta, había empezado también a desarrollarse un fenómeno que, al amplificar y multiplicar los problemas acumulados, cambiaría el curso de la historia nacional: el narcotráfico.

Estimulado por el enorme mercado estadounidense y surtido por la oferta de

pasta de coca de Perú y Bolivia, la cocaína encontró en Colombia no sólo una plataforma geoestratégica adecuada sino, sobre todo, un nicho propicio, creado por una situación estructural de aguda desigualdad social, ilegalidad y violencia que no pudieron ser institucionalmente canalizadas por un sistema político corrupto y en decadencia.

Por tratarse de un negocio ilegal y altamente rentable, el tráfico de drogas es una fuente inagotable de violencia y corrupción. Creó bandas de sicarios y asesinos a sueldo, adelantó campañas de terror contra la sociedad y el Estado, y recurre frecuentemente a la violencia para dirimir los conflictos entre los mismos narcotraficantes. Además, el narcotráfico ha contribuido a corromper a las autoridades y a todo aquel que le pueda ser útil: comunicador, deportista, artista, intelectual, abogado, empresario o político. Y quien no acepta su dinero, arriesga la vida. Pero el narcotráfico no sólo corrompe y ejerce violencia. Su principal impacto ha sido, sobre todo, el de fortalecer las formas de corrupción y violencia ya existentes.

En efecto, gracias a los impuestos y servicios cobrados por las FARC a los cultivadores de coca –y, en menor medida, también por el ELN–, ambas organizaciones comenzaron a acumular, desde fines de los años ochenta, una fortaleza financiera y militar, que contrastaba con el agotamiento de su discurso político. A estos ingresos hay que añadir las enormes sumas de dinero adquiridas mediante la extorsión y el secuestro, prácticas delictivas de la guerrilla, que han asumido las formas más bárbaras. Con esos recursos, aprovechando el creciente caos institucional y apoyándose en los agudos desequilibrios sociales existentes, ambas organizaciones han llegado a hacer presencia en buena parte de la geografía nacional. Esto explica cómo unas guerrillas políticamente marginales pudieron alcanzar una parecida fortaleza militar. Los desastrosos efectos que la apertura indiscriminada de los años noventa tuvo en la economía agraria, la crisis del café, la fumigación de los cultivos

de coca y la lucha abierta contra los cultivadores han contribuido a dar a las guerrillas nuevas bases sociales. De hecho, las FARC y el ELN se han transformado, en alguna medida, en una forma de empleo y reivindicación social de sectores de la juventud, sobre todo campesina.

Simultáneamente, auspiciados por narcotraficantes, grandes hacendados y comerciantes, y con el apoyo de políticos locales y de fuerza pública, han crecido los grupos de autodefensa y justicia privada. Nacidos en el Magdalena Medio en 1980, comenzaron a proliferar desde 1982, en la medida en que avanzaba el proceso de paz impulsado por Belisario Betancur. En 1996, ante la creciente ofensiva de la guerrilla, los distintos grupos establecieron una coordinación nacional y asumieron el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC han golpeado duramente al ELN, desalojaron a las FARC de la estratégica región de Urabá, vecina al canal de Panamá, vigilan de cerca las negociaciones con las FARC y crecen aceleradamente en el Valle del Cauca. Además de enfrentarse con las guerrillas, este conjunto de grupos armados realiza, sobre todo, masacres contra la población desarmada, con el pretexto de que son guerrilleros o auxiliares de aquéllos. Desde su creación, las AUC han ido desarrollando su propio discurso político y han comenzado a reclamar un lugar en una eventual mesa de negociaciones.

Según reiteradas denuncias de organismos internacionales y del mismo departamento de Estado norteamericano—denuncias que la justicia colombiana comienza a confirmar—, estos grupos han contado con la tolerancia o la abierta complicidad de importantes sectores de la fuerza pública. Esto ha contribuido a deteriorar aun más las prácticas de la guerra, incluso por parte de las autoridades oficiales, que también por esta vía se han visto contaminadas por el narcotráfico.

A este ya complejo escenario de violencias de carácter sociopolítico se suma un amplio espectro de delincuencia común, de sicarios y pandillas juveniles armadas, que el tráfico de drogas ha venido dejando tras de sí. En suma, el nar-

cotráfico ha exacerbado la violencia política y social colombiana hasta niveles que serían inconcebibles sin el aporte de sus dineros ilícitos. Sin la droga, Colombia no habría llegado a la crisis actual.

Pero, por otra parte, hay que reconocer que buena parte de la confusa mezcla de delito y violencia política que padece el país tiene que ver con la irrupción caótica de la insatisfacción social largamente represada por unas instituciones económicas y políticas estrechas e ideológicamente utilizada por las guerrillas para justificar la lucha armada. Finalmente, la corrupción y la violencia se han vuelto contra la tan preciada estabilidad de las instituciones económicas y políticas de Colombia.

4. LA CRISIS ECONÓMICA Y DE LA POLÍTICA

Como ya lo señalamos, desde 1996, la economía colombiana ha entrado en una depresión cuyo final no es claro todavía. Los factores que han incidido en ella son múltiples, unos más estructurales y otros coyunturales. Enumeremos algunos. Entre los primeros, se puede mencionar la abrupta liberación cambiaria y del movimiento de capitales realizada en 1991, que, combinada con la elevación de las tasas de interés en el contexto de la apertura, indujo, primero, el ingreso masivo y, luego, la fuga de dineros especulativos. La revaluación artificial del peso castigó severamente las exportaciones colombianas y estimuló las importaciones, creando un creciente y peligroso déficit en la cuenta corriente que ascendió, en 1998, a US\$5.354. En segundo término, hay que señalar el déficit fiscal. El Estado colombiano gasta más de lo que recibe. El déficit se ha agudizado desde 1991, debido a varios factores. Ante todo, a las elevadas transferencias que la nación debe hacer a los municipios, en virtud de lo dispuesto por la nueva Constitución. A esta carga se agregan tanto un altísimo pasivo pensional, estimado en más de cuatro mil millones de dólares, como un acelerado crecimiento del gasto público desde 1993. En este rubro, sobre todo los costos de seguridad y justicia se

han venido incrementando a lo largo de la década, sin que se puedan apreciar los resultados. Sobre este incremento pesan gravemente el conflicto armado, y la proliferación del delito y la violencia. Pero el desbordamiento del gasto ha sido fundamentalmente privado. Los colombianos gastan más de lo que producen, especialmente después del auge de la economía en 1993 y 1994. Más temprano que tarde, tendrán que ajustar el nivel de vida a sus posibilidades reales.

A estos factores se han venido a sumar recientemente numerosos fenómenos coyunturales. Los precios internacionales del café decayeron desde fines de los años ochenta, tras el fin de la organización mundial del grano. Otro tanto aconteció con el petróleo, cuando Colombia apenas comenzaba a beneficiarse de una transitoria bonanza en la que se habían cifrado muchas esperanzas. La transitoria recuperación de los precios del crudo en los últimos meses ha traído algún alivio. La construcción, que experimentó un fuerte y prolongado auge desde 1993 hasta 1996, entró luego en un profundo ciclo recesivo del que tardará aún en recuperarse. Por otra parte, el deterioro de las economías vecinas, en particular las de Venezuela y Ecuador, ha disminuido sensiblemente el importante intercambio comercial existente con esas naciones. En el frente financiero las cosas no han ido mejor. Ante el ataque especulativo al peso que se desató a fines de 1998, en el contexto de la crisis financiera internacional, el Banco de la República elevó fuertemente las tasas de interés, lo que golpeó la inversión y el consumo. Y aunque las tasas han bajado en la primera mitad de 1999, la falta de confianza en la situación general del país no ha permitido la reactivación de la economía. Por el contrario, personas y capitales están emigrando masivamente fuera del país. Mientras tanto, por primera vez en su historia, Colombia se ha visto obligada a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La crisis económica se hace cada día más profunda y compleja. A mediados de 1999, se ha puesto al descubierto una gra-

ve crisis financiera, causada, entre otras cosas, por el alza en las tasas de interés, la parálisis de la intermediación y la abultada cartera morosa. El rescate del sector demandará varios miles de millones de dólares. Por si esto fuera poco, el terremoto que afectó la zona cafetera en enero de 1999, generó nuevos gastos al Estado. Si se suman el costo del rescate financiero y el de la reconstrucción del eje cafetero a unas finanzas públicas ya debilitadas, los considerables esfuerzos fiscales realizados hasta ahora se tornan insuficientes, si no es que se han perdido por completo. El ajuste, vigilado ahora de cerca por el FMI, tendrá que ser aún más profundo, con los consiguientes efectos sobre la producción, el empleo y la desarticulación social.

La crisis de la producción ha generado un desempleo abierto que supera ya el 19,5% en las grandes ciudades, sin contar, desde luego, el desempleo rural, mucho mayor, y las numerosas formas de desempleo disfrazadas. Los efectos del nuevo ajuste crearán un clima poco favorable para las negociaciones de paz con las guerrillas.

Hasta ahora, la abundancia de reservas internacionales ha permitido que la economía no caiga en una crisis abrupta, no se ha producido una caída estrepitosa del peso y la inflación ha descendido a mínimos históricos, así sea en virtud de una escasa demanda. Pero las reservas no durarán indefinidamente si no se logra una pronta reactivación de la producción. Ahora bien, para este nuevo impulso, la situación de guerra parece haberse convertido en un freno estructural.

En la política el clima no es mejor. El Frente Nacional, que en su momento rescató al país de la violencia partidaria y al Estado de la dirección militar, sembró también la semilla de su decadencia. El monopolio bipartidista se adueñó del poder y excluyó del mismo a las fuerzas de oposición. Como sucedió en buena parte de la región, un clientelismo y una corrupción, exentos de competencia y control político, fueron invadiendo impunemente la vida pública y haciendo perder credibilidad a las instituciones políticas. De este modo, un sistema exclu-

yente y en descomposición preparaba la futura crisis del esquema institucional.

Concluido el Frente Nacional, la penetración del narcotráfico en la política aceleró la ruina del sistema. Desde los años setenta, muchos políticos comenzaron a recurrir a los vínculos con los narcotraficantes para financiar una actividad clientelista cada vez más costosa. Los dineros ilícitos penetraron en las campañas electorales. En los ochenta, algunos miembros del denominado “cartel de Medellín” no tuvieron reato en lanzarse a la arena política. El rechazo que les presentó Luis Carlos Galán y su grupo político, así como la guerra que les declaró el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), los llevó a la confrontación abierta con el Estado. Mientras el gobierno de César Gaviria (1990-1994) le hacía frente al embate terrorista, los dineros del grupo de Cali penetraban calladamente en la fuerza pública, los partidos, la justicia y el Congreso. Finalmente, los dineros del narcotráfico ingresaron masivamente a la campaña electoral de Ernesto Samper (1994-1998). La crisis de legitimidad, que afectaba ya las demás instancias políticas, contaminó también a la institución presidencial. El descrédito nacional e internacional del gobierno y el Congreso contribuyeron a desalentar la inversión y a un incremento del gasto público destinado a comprar respaldo político, a la vez que le ofrecían argumentos a la lucha guerrillera.

La crisis trascendió las fronteras nacionales. Si el desarrollo del narcotráfico y la violencia había servido para llamar la atención internacional sobre Colombia, el escándalo del gobierno de Samper le sirvió a Washington de pretexto para aislar al gobierno y estigmatizar a Colombia. De país amigo, estable, democrático y apegado al derecho internacional, Colombia pasó a ser calificado como la fuente de la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El Departamento de Estado descertificó durante dos años consecutivos la lucha del país contra las drogas, mientras autoridades y medios estadounidenses le imponían a Colombia el mote de “narcodemocracia”.

El aislamiento interno e internacional del gobierno de Samper contribuyó al desbordamiento paulatino de las múltiples dimensiones de la crisis. Las instituciones políticas perdieron toda credibilidad. Desde 1995, las guerrillas intensificaron sus ataques a la economía, le propinaron duros golpes al Ejército y la Policía y aumentaron su asedio a la población civil. Simultáneamente, auto-defensas y paramilitares extendieron su radio de acción y forzaron masivos desplazamientos de población. De tal manera que, ya desde 1997, algunos sectores de Washington se vieron obligados a comenzar a mirar la situación colombiana con otros ojos. La preocupación exclusiva por el narcotráfico se vio mediada por el problema más inmediato de la seguridad y estabilidad internas. Desde entonces, Colombia pasó a ser, para ciertos ámbitos estadounidenses, “el mayor reto de seguridad en el hemisferio occidental” y una “amenaza a la seguridad y la estabilidad regionales”.

5. LAS ENCRUCIJADAS DE LA PAZ

El cambio de gobierno y el triunfo de Andrés Pastrana (1998-2002) fue aprovechado por Washington para modificar parcialmente el acento de sus preocupaciones. El nuevo Presidente fue recibido con manifestos honores. Pero mientras la Casa Blanca y los demócratas apoyan las iniciativas de paz de Pastrana, los republicanos y el Pentágono se muestran más inclinados a incrementar decididamente el apoyo a la fuerza pública colombiana para la guerra frontal contra la “narcoguerrilla”. Por ahora, Washington conjuga ambas políticas: mientras le da su respaldo a las negociaciones de paz, incrementa el envío de equipo bélico y asesores militares, estimula la modernización militar y ejerce presión para que el Ejército gane legitimidad, evitando las violaciones a los derechos humanos y cortando sus vínculos con paramilitares. Sin embargo, las dificultades que viene experimentando el proceso de paz y los insistentes cuestionamientos al mismo, formulados por parte de sectores que

parecen anteponer sus intereses políticos particulares, vienen fortaleciendo en Washington la posición de quienes prefieren la guerra a la paz. Un eventual triunfo del candidato republicano en las próximas elecciones podría confirmar esta tendencia y acentuar el señalamiento de Colombia como amenaza regional.

En realidad, el conflicto interno colombiano, aunque tiene efectos muy perturbadores e indeseables sobre los vecinos, no constituye, por sí mismo, una amenaza a la seguridad regional. En efecto, algunos grupos armados desbordan ocasionalmente las fronteras nacionales de los países vecinos, secuestran a sus nacionales y realizan ataques esporádicos. Estos fenómenos graves y deplorables se han presentado sobre todo en territorio venezolano. Sin embargo, no es fácil que las organizaciones armadas colombianas se propongan extender el conflicto a las naciones vecinas, o estén en condiciones de hacerlo. El riesgo regional se deriva más bien de la inestabilidad de todos los países del área, debido a la cual, los problemas de uno cualquiera de ellos pueden encontrar resonancias inesperadas en sus vecinos. Lo que se requiere no es, pues, el aislamiento regional de ningún país, sino el mutuo apoyo y la solidaridad de las sociedades y sus gobiernos para ayudar a la búsqueda de la paz por parte de los colombianos.

La colaboración internacional en la solución del conflicto interno de Colombia es hoy indispensable. Pero no toda injerencia es positiva. Recientes "intervenciones humanitarias" han terminado agravando los conflictos e implicando a los actores externos en la guerra misma, con nefastas consecuencias para todos. Por eso Colombia debe escoger muy bien las modalidades de cualquier presencia externa, y ésta debe ser acordada internamente entre todas las partes y en el ámbito externo entre los Estados.

Países vecinos, como Venezuela, pueden desempeñar un papel fundamental en calidad de acompañantes, observadores y garantes de las negociaciones y los acuerdos. En concreto, deben impedir que las partes abandonen la mesa de

negociación o incumplan lo ya acordado, o que el proceso se estanque indefinidamente. Pero deberían evitar su implicación directa en la dinámica de la negociación y en los temas concretos en discusión. De lo contrario, su esfuerzo podría transformarse en discrepancias con uno o varios actores colombianos. Esta situación sería particularmente delicada en el caso de países vecinos, más directamente afectados por el conflicto.

Los países amigos deben mantener una prudente distancia frente a todos los actores internos del conflicto para mantener un alto índice de credibilidad ante ellos, lo que no significa que deban otorgarle a las guerrillas o a los paramilitares una legitimidad equiparable a las del Estado y la sociedad colombianos. Hay que tener en cuenta que el poder de la guerrilla colombiana no se debe tanto a una legitimidad social o política ampliamente reconocida en el país, sino sobre todo a sus enormes recursos, a su poder de intimidación en muchas regiones y a su capacidad para generar empleo. El hecho de que, según una reciente encuesta de opinión, el 66% de los colombianos se manifiesten a favor de una intervención militar estadounidense, es reflejo de esta situación.

Colombia enfrenta la crisis más profunda de su historia republicana. En su haber se inscriben la tenacidad y el espíritu emprendedor de los colombianos, su larga historia civilista, la prolongada estabilidad económica del país, su tradicional respeto a las normas del derecho internacional y el apoyo brindado a otros países, en la búsqueda de solución política y negociada a sus conflictos internos.

La búsqueda de la paz es, para Colombia, una necesidad inaplazable. Un arreglo negociado con las guerrillas, aunque difícil y costoso, permitiría quizás comenzar a superar los tradicionales desequilibrios sociales y la estrechez de las prácticas políticas en beneficio de una mayor democracia, favorecería una inserción internacional más positiva del país, en unión con sus vecinos, y, de paso, haría más viable cualquier solución al problema del narcotráfico.

